



Un enfoque desde los casos de ineficiencia en el manejo del presupuesto público y privado en Ecuador

An approach from cases to inefficiencies in the management of the public and private budgets in Ecuador

 <https://doi.org/10.47230/revista.ciencia-lideres.v4.n1.2025.45-56>

Recibido: 10-01-2025 **Aceptado:** 15-02-2025 **Publicado:** 20-03-2025

Fabian Eduardo Barcia Villamar¹

 <https://orcid.org/0000-0003-2261-0988>

Audrey Jacqueline Holguín Briones²

 <https://orcid.org/0000-0003-3783-5733>

Melissa Catalina Merchán Píloco³

 <https://orcid.org/0000-0003-2381-9660>

1. Docente de la Carrera Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
2. Docente de la Carrera de Administración de empresa, Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, y Comercio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Manta, Ecuador.
3. Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.

Volumen: 4

Número: 1

Año: 2025

Paginación: 45-56

URL: <https://revistas.unesum.edu.ec/rclideres/index.php/rcl/article/view/122>

***Correspondencia autor:** william.ponce@unesum.edu.ec



RESUMEN

La gestión presupuestaria en el sector público es fundamental para garantizar una administración financiera eficiente y sostenible. En este contexto, el Gobierno de Ecuador desempeña un papel crucial en la planificación, ejecución y control de los recursos públicos, El presente estudio tuvo como objetivo analizar las principales deficiencias en el manejo presupuestario durante el año 2023, desde una perspectiva de gestión pública. Para alcanzar este objetivo, se utilizó una metodología documental basada en el análisis de informes oficiales y estadísticas fiscales. Los datos recabados evidencian que el gasto público ascendió a 25.027 millones de dólares, mientras que los ingresos fueron de 19.570 millones, generando un déficit de 5.456 millones de dólares, equivalente al 4,4% del PIB. Además, se observó una acumulación de atrasos en pagos a proveedores y entidades públicas por un total de 3.584 millones de dólares, lo que afectó la ejecución de proyectos estratégicos, los resultados del análisis revelan que factores como la falta de planificación presupuestaria, el incremento del gasto en rubros no prioritarios y la corrupción administrativa impactan negativamente en la estabilidad financiera, ya que, se identificaron áreas de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los mecanismos de control y la optimización de la inversión pública.

Palabras clave: Administración, Entidades, Ineficiencia, Gasto, Presupuesto.

ABSTRACT

Budgetary management in the public sector is fundamental to ensure efficient and sustainable financial administration. In this context, the Government of Ecuador plays a crucial role in the planning, execution and control of public resources, The present study aimed to analyze the main deficiencies in budget management during the year 2023, from a public management perspective. To achieve this objective, a documentary methodology based on the analysis of official reports and fiscal statistics was used. The data collected evidenced that public expenditure amounted to US\$25,027 million, while revenues were US\$19,570 million, generating a deficit of US\$5,456 million, equivalent to 4.4% of GDP. In addition, an accumulation of arrears in payments to suppliers and public entities totaling US\$3,584 million was observed, which affected the execution of strategic projects. The results of the analysis reveal that factors such as the lack of budgetary planning, increased spending on non-priority items and administrative corruption have a negative impact on financial stability, since areas for improvement were identified in relation to the strengthening of control mechanisms and the optimization of public investment.

Keywords: Administration, Entities, Inefficiency, Spending, Budget.



Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Introducción

En el contexto económico del Ecuador, la gestión del presupuesto público desempeña un papel fundamental en la distribución eficiente de los recursos hacia sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura, bajo esta función es responsabilidad directa del gobierno central, que debe garantizar una administración transparente y eficiente.

No obstante, en los últimos años se ha evidenciado una creciente preocupación por la falta de planificación, el déficit fiscal persistente y la escasa transparencia en el manejo de los fondos públicos. Estos factores han motivado el desarrollo de investigaciones orientadas a analizar las deficiencias estructurales que afectan la sostenibilidad financiera del país.

Es decir, la adecuada planificación presupuestaria no solo es un instrumento técnico, sino también una herramienta de desarrollo que incide directamente en la calidad de vida de la población, ya que, la experiencia ecuatoriana demuestra que las debilidades en la gestión del gasto público pueden tener repercusiones significativas en el cumplimiento de metas sociales y económicas.

A nivel nacional, el déficit presupuestario se ha convertido en un problema estructural, exacerbado por la reducción de ingresos fiscales y el crecimiento del gasto corriente, especialmente en salarios y pagos de deuda. Esta situación limita la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros, generando atrasos en pagos a proveedores y afectando sectores clave como la infraestructura y el desarrollo social.

Es decir, la gestión fiscal debe orientarse hacia el equilibrio entre ingresos y egresos, priorizando la inversión pública de alto impacto y reduciendo gastos improductivos, donde, la sostenibilidad de las finanzas públicas es esencial para la estabilidad económica del país.

Dentro del análisis realizado, se identificaron prácticas irregulares vinculadas a procesos de contratación estatal, donde se ha evidenciado corrupción, sobrepagos, manipulación de procesos administrativos y adjudicaciones fraudulentas, estas acciones no solo generan pérdidas económicas, sino que también erosionan la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y comprometen el desarrollo equitativo de la sociedad.

Por lo que, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y sanción, con el objetivo de garantizar una administración responsable de los recursos públicos, la implementación de sistemas de transparencia y rendición de cuentas es clave para prevenir crisis fiscales futuras.

Los resultados del análisis revelan que los principales desafíos radican en la falta de planificación eficiente, la corrupción en la asignación de recursos y la débil fiscalización institucional, ya que, se identificaron áreas de mejora vinculadas al fortalecimiento de políticas públicas, control del gasto y diseño de estrategias para optimizar la ejecución presupuestaria. Esta investigación proporciona una base sólida para proponer medidas que contribuyan a una gestión financiera más responsable y orientada al desarrollo sostenible.

Desarrollo

El estado ecuatoriano en el año 2023 se encontró con una situación difícil ya que empezó a gastar demás a pesar de no tener de donde, durante este período los gastos del gobierno alcanzaron los 25,027 millones de dólares, por otro lado, en cambio los ingresos solo sumaron 19,570 millones de dólares, esto lo que generó es que exista un exceso de gastos por 5,456 millones de dólares dando como resultado que exista un significativo desequilibrio en las finanzas públicas.

Estas deficiencias provocan que exista un déficit fiscal el cual representó el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en

el año 2023, durante los años anteriores a este el ministerio de finanzas durante el gobierno de Guillermo Lasso ya estaba proyectando que existiría un déficit de 3,500 millones de dólares, lo cual es equivalente al 3% del PIB, pero se tienen en cuenta que esta predicción no se llegó a cumplir (Araque, 2024).

Con esto se puede ver como el déficit fiscal del 4.4% del PIB en el año 2023 refleja un escenario económico más complejo de lo previsto, superando las proyecciones iniciales del gobierno de Guillermo Lasso el donde estimaban un déficit del 3% del PIB que era equivalente a 3,500 millones de dólares, con este incumplimiento de las predicciones sugiere que los factores económicos subyacentes, como la recaudación tributaria, el gasto público o condiciones externas, fueron más adversos de lo que se pensaba.

Así pues, la brecha entre lo proyectado y lo real evidencia la dificultad de gestionar las finanzas públicas en un contexto que ya es de incertidumbre, haciendo que esto pueda tener implicaciones significativas en la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas, así con este panorama se plantea la necesidad de revisar las estrategias fiscales y fortalecer los mecanismos de planificación para mitigar posibles riesgos a futuros.

Debido a que no se contaba con los recursos necesarios y suficientes para cubrir gastos que están elevados en el presupuesto, resulta que el gobierno retrasó los pagos a proveedores, a las instituciones locales y al sistema de seguridad social, entre otros, debido a estos retrasos se acumularon un total de 3,584 millones de dólares en 2023, lo que da como resultado más del doble de lo registrado en el año 2022 ya que en ese momento la cifra fue de 1,500 millones de dólares.

Además, debido a esto el gobierno se vio obligado a que los proveedores y los gobiernos locales se conviertan en financistas de manera obligada básicamente, esto se debe a la magnitud de los atrasos, estos problemas mismos pueden ser parte del gobierno ante-

rior, ya que no se buscaron alternativas de financiamiento externo y que debido a esto se optó por cubrir los gastos mediante retrasos en los pagos, siendo estas una de las formas más perjudiciales de financiamiento, ya que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la economía.

Problemas en el presupuesto. El gobierno tiene uno de los tantos desafíos importantes, ya que tiene la disminución en los ingresos, tanto por la recaudación de impuestos como por la venta de petróleo los cuales son diferentes en comparación con las proyecciones iniciales de años anteriores, hay que tener en cuenta que pesar de la reducción en los ingresos, el gasto público no se ajusta a la realidad, ya que por el contrario aumenta, aunque no en inversión productiva, sino que en el pago de salarios estatales.

También debido a esto el gobierno recibió menos préstamos de los esperados, ya que según la proforma presupuestaria del año 2023 se había previsto un ingreso de 7,577 millones de dólares en créditos, pero esto no fue así ya que resulta que solo se materializaron 5,759 millones de dólares, debido a esta brecha entre lo planificado y lo ejecutado se complica más la situación fiscal.

Existe la brecha entre los préstamos previstos y los realmente obtenidos lo cual agrava la situación fiscal del país, de acuerdo a la proforma presupuestaria de 2023, se esperaba recibir los créditos, pero solo se concretaron una parte de ellos, con esta diferencia se refleja que existe un acceso limitado al financiamiento externo, el cual posiblemente este influenciado por factores como la desconfianza de los acreedores, las condiciones económicas globales adversas o la percepción de riesgo asociada al país.

Teniendo en cuenta esto, la incapacidad de cumplir con estas proyecciones no solo reduce los recursos disponibles para cubrir los gastos públicos, sino que también limita la capacidad del gobierno para poder implementar políticas de reactivación económica, con este escenario se subraya

la importancia de fortalecer la credibilidad fiscal y a la vez poder mejorar la gestión de la deuda para evitar futuros desajustes que comprometan la estabilidad financiera.

Los retos que presenta el gobierno es poder acceder a fuentes de crédito, las cuales ya se ha vuelto escasas desde el año 2023, también tener en cuenta el déficit presupuestario, ya que las necesidades de financiamiento donde se tienen en cuenta también los préstamos podrían ascender a unos 11,000 millones de dólares.

Atrasos en los pagos.- Para el año 2023 el presupuesto cerró con un acumulado de 3,584 millones de dólares en pagos pendientes, de este monto hay una parte significativa de aproximadamente 1,321 millones de dólares, las cuales correspondían a transferencias que el estado debía realizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) esto para cubrir el 40% de las pensiones de los jubilados, pero no se pudo ya que el gobierno solo cumplió con el 39% de los 2,118.5 millones de dólares que debía transferir durante ese año.

Con el cierre del presupuesto en el año 2023 en pagos pendientes se evidencia un incumplimiento significativo en las obligaciones fiscales del estado, así pues de este monto una aparte correspondía a transferencias destinadas al IESS, esto se realizó para poder cubrir parte de las pensiones de los jubilados, pero, sin embargo, el gobierno solo cumplió con una parte de lo que debía transferir.

Esto deja un saldo pendiente considerable además de que este incumplimiento no solo afecta directamente a los beneficiarios del sistema de pensiones, sino que también refleja una gestión fiscal insuficiente para garantizar el flujo de recursos hacia áreas importantes, así esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social y genera desconfianza en la capacidad del estado para cumplir con sus compromisos, esto podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad económica y social del país.

También otro de los atrasos importantes fue el relacionado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aquí se incluyen municipalidades, prefecturas y juntas parroquiales, ya que durante el 2023 los representantes de estos gobiernos locales llevaron a cabo diversas manifestaciones para exigir el cumplimiento de las transferencias que les correspondían, de acuerdo a el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los GAD tienen derecho a recibir el 21% de los ingresos permanentes del presupuesto y el 10% de los ingresos no permanentes, debido a esto se tiene que los atrasos en estas transferencias suman 842 millones de dólares.

Han existido reuniones con representantes de los gobiernos locales para analizar posibles acuerdos de pago, entre estas medidas se encuentran el canje de deuda de los municipios con el Banco de Desarrollo del Ecuador y la transferencia de inmuebles del gobierno central a los gobiernos locales como parte de la solución a estos atrasos ya que estas acciones buscan aliviar la presión financiera y restablecer recursos hacia los sectores afectados.

Recortes en el presupuesto público. El gasto público alcanzó la cifra de 25,027 millones de dólares para el año 2023 lo que representó un incremento de 1,642 millones de dólares en comparación con el año anterior, con este aumento se vio concentrado principalmente en el pago de salarios a los empleados estatales, que ascendió a 9,738.5 millones de dólares, esto se debe en parte por la mayor contratación de personal policial y por el incremento salarial para los docentes.

Otro factor que contribuyó al alza en el gasto público fue el aumento de 798 millones de dólares en los intereses de una porción de la deuda externa del país, en comparación con 2022. Este incremento se debió al alza de las tasas de interés a nivel internacional, lo cual elevó los costos asociados al servicio de la deuda para Ecuador.

Por otro lado, el gasto en inversión y obra pública no experimentó un crecimiento significativo, el gobierno había planeado destinar 1,871 millones de dólares para los proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones (PAI) durante el año 2023, de esto solo se logró ejecutar 1,371 millones de dólares, siendo esta cifra no solo fue inferior a lo presupuestado, sino que también tuvo una disminución en comparación con los 1,526 millones de dólares invertidos en el PAI durante el año 2022.

Además, el gobierno acumuló 354 millones de dólares en pagos pendientes relacionados con proyectos del PAI, con esto se refleja una falta de liquidez para cumplir con las obligaciones que se tienen, lo cual ha generado retrasos en la ejecución de obras y proyectos de inversión pública, con esta situación se evidencia un desequilibrio en la gestión financiera, donde los gastos corrientes como salarios y deuda son priorizados sobre la inversión en infraestructura de desarrollo.

Problemas en los municipios que más gastan. Dentro de los municipios que más gastan se encuentra el municipio de Guayaquil que se posicionó como la segunda institución pública con mayor número de contrataciones la cual ha alcanzado un total de 31 adjudicaciones, esta fue superado por el ministerio de salud, que ocupa el primer lugar, de acuerdo con datos proporcionados por la Sercop, la alcaldía de Guayaquil destinó aproximadamente 16.5 millones de dólares entre el 3 de marzo y el 26 de junio del año 2020, una cifra bastante abundante (Pesantes, 2020).

En estos contratos se encuentran dos proyectos de infraestructura que destacaron por su alto costo, el primero fue la repotenciación de la antigua maternidad Sotomayor, y el segundo, la adecuación del cementerio Ángel María Canals, ubicado al sur de la ciudad, estos dos proyectos representaron un gasto de 7.2 millones de dólares a la vez que se destinaron 4 millones de dólares para la construcción de bóvedas en el sector.

Queda en evidencia así como los altos costos a cambio de realizar algún proyecto o llevarlo a cabo es un problema que tiene que resolverse, ya que así es como se realizan obras a un precio diferente al que originalmente debería de ser, lo que provoca sobrepagos y genera ineficiencias dentro del sistema.

Aparte de las obras físicas el municipio realizó varias adquisiciones para enfrentar la crisis sanitaria, entre estas se incluyó la compra de mascarillas N95 por un valor de 300,000 dólares, así como la adquisición de 160,000 unidades del fármaco Azitromicina, utilizado en el tratamiento de pacientes con Covid-19 a la vez que se adquirieron 100,000 unidades de Hidroxicloroquina, otro medicamento empleado durante la pandemia.

También se implementaron medidas de apoyo social como la distribución de kits alimenticios en las zonas más vulnerables de la ciudad, por el lado del ámbito médico se procuraron insumos esenciales, entre los cuales se destacan 50,000 pruebas rápidas, zapatos quirúrgicos, trajes de bioseguridad y guantes, con estas compras se refleja un esfuerzo por atender tanto las necesidades sanitarias como las sociales de la población durante el período crítico que se vivió.

Durante la emergencia sanitaria se recurrió a varios proveedores, entre los cuales destacan algunos nombres que aparecieron de manera recurrente, como la empresa Arkitrust S.A., que logró adjudicarse dos contratos relacionados con la repotenciación de la antigua maternidad Sotomayor, esta se encargó del diseño y reconstrucción de este centro de salud, quince días después, se le asignó un segundo contrato por 2 millones de dólares para la ejecución de la segunda fase del mismo proyecto.

Otro caso interesante es el del Consorcio Casuarina, una empresa encargada de construir 5,700 bóvedas para los fallecidos a causa de la pandemia, sin embargo, esta empresa no figuraba en los registros de la superintendencia, aunque sí estaba inscrita

en el SRI desde el 29 de abril de 2020, lo raro es que el contrato para la construcción de las bóvedas fue adjudicado cuatro días antes de su registro oficial.

Estos casos reflejan situaciones curiosas en la que empresas recién creadas o con poca trayectoria registrada han logrado obtener contratos de alto valor durante la emergencia sanitaria, esta situación plantea incertidumbre sobre los procesos de selección y adjudicación a la vez que se pone en duda la transparencia en la gestión de recursos públicos durante un período crítico.

Enriquecimiento no justificado. De acuerdo con la fiscalía general del estado se ha presentado cargos contra algunas personas por la presunta participación al cometer el delito de enriquecimiento no justificado, se han dado algunas medidas cautelares ya que el juez a cargo del caso ordenó que los implicados se presenten periódicamente dos veces por semana además de que se les prohibió salir del país esto con el fin de garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso judicial (Fiscalía General del Estado, 2022).

Con lo dicho por el informe de la fiscalía general del estado, se ha avanzado en la investigación de casos relacionados con el delito de enriquecimiento no justificado, presentando cargos contra varios individuos, dentro de lo que se ha tomado por la justicia, parte de las medidas cautelares que dictó el juez a cargo del caso es que aquellos implicados se presenten periódicamente y se les ha prohibido la salida del país.

Con estas disposiciones se buscan asegurar que los acusados permanezcan disponibles para las siguientes fases del proceso judicial, evitando posibles obstrucciones a la investigación, con este tipo de acciones refleja un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, al mismo tiempo que también plantea desafíos en términos de garantizar un proceso justo, la resolución de estos casos será clave para

reforzar la confianza en las instituciones en la lucha contra la corrupción.

La investigación tomo lugar con una serie de diligencias realizadas por un equipo creado específicamente para investigar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, estas acciones se llevaron a cabo en debido a múltiples denuncias que señalaban irregularidades en instituciones públicas de varias provincias.

En la fase de investigación preliminar se logró descubrir que los involucrados participaron en procesos de contratación pública presentando ofertas para la adquisición de insumos médicos, esto por medio de la inclusión de proformas que hacían que una de las ofertas pareciera más conveniente, lograban que los contratos fueran adjudicados para posteriormente retirar la mayor parte del dinero y distribuirlo.

Parte de los descubrimientos también indicaban sus actividades laborales reales no coincidían con las declaradas, como, por ejemplo, en un allanamiento a uno de los presuntos proveedores se pudo descubrir que en el lugar funcionaba una ferretería donde se hallaron documentos relacionados con los procesos de contratación bajo investigación.

Se tienen que el incremento patrimonial conjunto de los dieciséis procesados es de aproximadamente 8 millones de dólares, una cifra que no pudieron justificar y que, de acuerdo a las investigaciones, habría sido obtenida a través de la adjudicación de contratos en varios hospitales pertenecientes a la red de salud pública.

Entre las pruebas reunidas se incluyó información encontrada de los teléfonos celulares de los implicados, con esto se evidenciaría la presunta comisión del delito, también se usaron informes financieros y de contratación pública, estos datos sobre los contratos adjudicados y documentación fueron obtenidas durante allanamientos realizados en varios centros de salud.

Con este caso se puede evidenciar la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos de contratación pública, especialmente en situaciones como las de emergencia, ya que en estas situaciones se pueden aprovechar para cometer actos de corrupción, la investigación muestra el esfuerzo por parte de las autoridades para combatir estas prácticas, de este modo se garantiza que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada en conjunto con el beneficio de la ciudadanía.

Problemas de peculado. Se han presentado cargos contra cinco individuos por el delito de peculado, de acuerdo con la fiscalía general del estado existe un presunto acto de corrupción que habría causado un perjuicio económico al estado de aproximadamente 49 millones de dólares, dentro de los implicados se encuentran cuatro funcionarios de la empresa pública EP Petroecuador.

Esta investigación se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles irregularidades en un proceso de contratación relacionado con una póliza de seguros, estas misma incluía coberturas de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima para EP Petroecuador la cual fue suscrita con una compañía de seguros por un monto superior a los 98 millones de dólares.

De acuerdo a la evidencia este proceso de contratación se habría realizado sin contar con un informe técnico que determinara el presupuesto referencial adecuado, este mismo debía incluir una valoración detallada de los activos en conjunto con una verificación de los riesgos asegurables por parte de Petroecuador, pero en vez de esto, se utilizaron como referencia dos cotizaciones proporcionadas por distintas aseguradoras, una por 123 millones de dólares y otra por 121 millones de dólares (Fiscalía General del Estado, 2024).

Se entiendo como los procesos de contratación en cuestión se han llevado a cabo sin un informe técnico que estableciera un

presupuesto referencial adecuado, lo cual es un requisito fundamental para garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos, ya que este informe debía incluir una valoración detallada de los activos y una verificación de los riesgos asegurables sobre los aspectos del proyecto.

Con esta omisión no solo se cuestiona la rigurosidad del proceso, sino que también deja dudas sobre la legitimidad de las cifras manejadas y la posible falta de control en la asignación de contratos lo cual representa un grave problema que se tiene que solucionar lo más pronto posible.

En base a estas ofertas se estableció un presupuesto referencial de 99,136,443.84 de dólares, además resulta que el contrato fue adjudicado al proveedor que presentó la única oferta válida, la cual superaba los 98 millones de dólares y por último como parte del acuerdo ya se habría hecho un pago con un anticipo de aproximadamente 49 millones de dólares.

En este problema también se identificó que, durante el proceso que hay de contratación, se registró un valor asegurable de más de 10,000 millones de dólares, pero, sin embargo, este monto tampoco habría sido debidamente justificado ya que no se encontró evidencia pública que detallara los bienes asegurables de Petroecuador.

Debido a esta falta de transparencia y justificación técnica que existe en el proceso ha levantado importantes dudas sobre la legalidad además de la legitimidad de la contratación, esto ha llevado a la fiscalía a profundizar en la investigación, del mismo modo se han formulado cargos contra los presuntos responsables, con este caso se pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos haciendo especial énfasis en sectores importantes como el petrolero.

Materiales y métodos

En el desarrollo de esta investigación sobre la ineficiencia en la administración del presupuesto público en Ecuador, se empleó una metodología basada en el análisis documental y el enfoque cualitativo ya que la información fue recopilada a partir de fuentes oficiales, informes financieros, estudios académicos y artículos de prensa que documentan la situación económica del país.

También, se llevó a cabo una revisión profunda de datos estadísticos proporcionados por informes correspondientes a la contraloría general del estado, estos informes permitieron evaluar la evolución del déficit fiscal, la ejecución presupuestaria en conjunto con el impacto de las decisiones gubernamentales en la estabilidad económica del país.

Además, se pudo analizar casos específicos de corrupción y mala gestión en la administración pública, para esto se consideraron procesos judiciales y denuncias periodísticas que evidenciaron irregularidades en el manejo de fondos estatales, esto con el objetivo de identificar patrones de mala administración y proponer estrategias para mejorar la eficiencia financiera.

En lo que respecta al enfoque integral, se incluyó información que tiene que ver con finanzas públicas y gubernamentales, esto permitió obtener una visión más profunda sobre las causas del déficit fiscal, las políticas implementadas y los posibles mecanismos que han estado presente en los efectos negativos de una mala planificación presupuestaria.

Para los materiales utilizados se emplearon documentos oficiales y artículos de investigación que proporcionaron un marco teórico sólido, de este modo ayudo a facilitar la comparación de información permitiendo identificar las tendencias en la administración del presupuesto público.

También se tiene que el estudio se fundamentó en la información encontrada durante el período comprendido entre 2020

y 2023, considerando tanto la gestión del gobierno de Guillermo Lasso como la transición hacia el nuevo gobierno, también se priorizó el análisis de sectores clave como la seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y la inversión en infraestructura ya que tiene relevancia en la economía nacional.

Una vez recopilada la información se contrastaron diversas fuentes de información donde se incluyen informes oficiales, así se priorizó el análisis de documentos de organismos gubernamentales con el fin de evaluar el manejo del presupuesto en distintos periodos, además, se revisaron publicaciones de medios de comunicación que han documentado casos de corrupción y mala gestión en el sector público.

Esto se realizó en conjunto con un enfoque comparativo para poder identificar patrones en la administración de los recursos estatales, así se encontró información necesaria sobre datos de años anteriores y se contrastaron con la situación actual para poder analizar y ver las variaciones en el déficit fiscal, la inversión pública y el cumplimiento de obligaciones financieras, con este análisis permitió establecer correlaciones entre las decisiones gubernamentales y sus efectos en la estabilidad económica del país.

Por último, se usaron métodos de triangulación de datos para validar la información obtenida y evitar sesgos en la interpretación de la misma, ya que la combinación de diversas fuentes y enfoques metodológicos permitió construir un marco teórico bien fundamentado sobre la crisis presupuestaria en Ecuador.

Resultados

Como resultados se pudo encontrar una serie de deficiencias que han afectado gravemente la estabilidad financiera del país, como, por ejemplo, durante el periodo 2023, se evidenció un significativo déficit fiscal de 5,456 millones de dólares lo cual ha representado el 4.4% del PIB, esta situación fue

consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos, donde los ingresos estatales no lograron cubrir el nivel de gasto registrado.

También se encontró que existe retraso en los pagos a proveedores, gobiernos locales y la seguridad social, lo cual ha acumulado una deuda de 3,584 millones de dólares, esta falta de liquidez impactó directamente a sectores estratégicos como la salud y la educación, generando limitaciones en la prestación de servicios esenciales, también el incumplimiento de pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) afectó a los jubilados, quienes no recibieron de manera oportuna las transferencias de sus pensiones lo que ha generado protestas y reclamos por parte de los beneficiarios.

Por otro lado, los problemas estructurales en la planificación y ejecución del presupuesto público también son de destacar, ya que, a pesar de la reducción en ingresos por impuestos y venta de petróleo, el gasto estatal no se ajustó a la realidad económica, debido a que se priorizó el pago de salarios en lugar de la inversión en infraestructura y programas de desarrollo, con los 1,871 millones de dólares destinados solo se ejecutaron 1,371 millones, lo que representó una disminución con respecto al año 2022, este desequilibrio refleja la incapacidad del estado para distribuir eficientemente los recursos disponibles.

En lo que se refiere a los gobiernos municipales, se encontró que el municipio de Guayaquil se posicionó como una de las instituciones con mayor número de contrataciones, adjudicando 16.5 millones de dólares en proyectos durante el año 2020, se encontró que algunos de estos presentaron irregularidades, así se evidenció la contratación de empresas sin trayectoria registrada, lo que generó dudas sobre la transparencia en los procesos de adjudicación, se tiene en cuenta que este tipo de prácticas también se replicaron en otros municipios y organismos estatales lo que está afectando la confianza ciudadana en la gestión pública.

Dentro de los casos de corrupción encontrados se mostraron que las irregularidades en la adjudicación de contratos no solo fueron recurrentes, además de esto se involucraron montos significativos, como en el caso de Petroecuador, donde se detectó un contrato de seguros por más de 98 millones de dólares y fue adjudicado sin una evaluación técnica adecuada, esto ocasionó un perjuicio económico de aproximadamente 49 millones de dólares.

Con la información encontrada se evidenció que la falta de planificación y control en la administración del presupuesto ha provocado un déficit creciente y problemas en la ejecución de pagos, esto ha llevado a que el gobierno acumule deudas con proveedores, gobiernos locales y el IESS, afectando servicios esenciales y generando conflictos con distintos sectores, teniendo en cuenta esto en conjunto con la falta de acceso a financiamiento externo es lo que agrava la situación del país al hacer que se haga más difícil tener financiamiento externo.

Podemos sintetizar que los resultados de este trabajo reflejan la importancia de implementar políticas de control más estrictas para mejorar la gestión del presupuesto en nuestro país, ya que la falta de planificación financiera, los retrasos en pagos y los casos de corrupción han generado un impacto negativo en la economía, por ello es fundamental que se adopten estrategias que garanticen un uso más eficiente de los recursos, priorizando la inversión productiva y asegurando la transparencia.

Conclusiones

El estudio concluye que se evidencian serias deficiencias en la planificación, ejecución y control de los recursos estatales, ya que la existencia de un déficit fiscal creciente en conjunto con el incumplimiento en los pagos a sectores estratégicos y la corrupción en la adjudicación de contratos reflejan la necesidad urgente de reformar la gestión financiera del país, teniendo en cuenta que los ingresos estatales no fueron suficientes

para cubrir los compromisos adquiridos, lo que lleva al gobierno a recurrir a mecanismos de financiamiento poco sostenibles.

Dentro de los problemas identificados, el principal es la falta de previsión en la distribución del presupuesto, ya que, a pesar de la disminución de ingresos, el gasto estatal continua en aumento, especialmente en el pago de salarios, la inversión en infraestructura y servicios esenciales, es importante la priorización de rubros no productivos ya que han generado un desbalance financiero que pone en riesgo la estabilidad económica del país, es importante que el estado adopte estrategias de racionalización del gasto para permitir optimizar los recursos sin comprometer el desarrollo nacional.

También, la falta de transparencia en la adjudicación de contratos públicos ha sido otro factor determinante en la crisis financiera, teniendo en cuenta casos de corrupción como los detectados en Petroecuador o en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia, lo que ha demostrado las debilidades del sistema de control gubernamental, así como también la existencia de empresas sin experiencia que obtienen contratos millonarios, la falta de justificación técnica en procesos de contratación evidencian la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sin estos, la corrupción seguirá siendo un problema para el crecimiento económico del país.

Es importante entender que para mejorar la administración del presupuesto es necesario implementar medidas que fomenten la transparencia en el uso de los recursos públicos, esto se puede lograr mediante la digitalización de los procesos administrativos, la publicación de informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria y la participación activa de organismos de control independientes, por otro lado, se deben establecer sanciones más graves para quienes incurran en actos de corrupción así se garantiza que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Es importante que se empiece a implementar ya mecanismos de control más estrictos que garanticen una gestión eficiente de los recursos, se puede optar por la digitalización de los procesos administrativos, junto con auditorías frecuentes y sanciones efectivas para quienes incurran en corrupción ya que permitiría reducir el mal uso del presupuesto.

También es importante la transparencia y la rendición de cuentas ya que juegan un papel clave en la solución de estos problemas, así como la publicación de informes financieros y la participación de organismos de control independientes que pueden contribuir a controlar estos problemas.

En síntesis, se concluye que la gestión presupuestaria en Ecuador enfrenta desafíos muy fuertes que requieren soluciones estructurales junto con un compromiso real por parte de las autoridades, ya que, sin una planificación adecuada y un control efectivo de los gastos junto con medidas concretas contra la corrupción, el país continuará experimentando crisis financieras que impactan a todos los sectores de la sociedad, por ello se deben realizar reformas profundas en la administración de los recursos públicos para garantizar la sostenibilidad económica y la transparencia en la distribución del presupuesto.

Bibliografía

Bibliografía

- Araque, W. (2024). Al IESS y a los municipios les tocó financiar al Estado. Obtenido de <https://dialoguemos.ec/2024/01/al-iess-y-a-los-municipios-les-toco-financiar-al-estado-en-2023/>
- Fiscalía General del Estado. (30 de Agosto de 2022). Fiscalía formula cargos contra 16 personas por presunto enriquecimiento privado no justificado. Obtenido de <https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-formula-cargos-contra-16-personas-por-presunto-enriquecimiento-privado-no-justificado/>
- Fiscalía General del Estado. (7 de Febrero de 2024). Cinco procesados por presunto peculado en Petroecuador. Obtenido de <https://www.fiscalia.gob.ec/accesibilidad/cinco-procesados-por-presunto-peculado-en-petroecuador/>

Pesantes, K. (2020). Municipio de Guayaquil, entre los que más gasta en la emergencia. Obtenido de <https://www.primicias.ec/noticias/politica/municipio-guayaquil-entre-los-que-mas-gasta-en-la-emergencia/>

Cómo citar: Barcia Villamar, F. E., Holguín Briones, A. J., & Merchán Píloco, M. C. (2025). Un enfoque desde los casos de ineficiencia en el manejo del presupuesto público y privado en Ecuador. *Revista Ciencia Y Líderes*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.47230/revista.ciencia-lideres.v4.n1.2025.45-56>